

Señor(a)
JUEZ REPARTO
Pereira
E.S.D

Referencia: Acción de tutela
Accionante: IRMA CECILIA CARDONA MARTINEZ
C.C. 25.161.458 expedida en Santa Rosa de Cabal

Accionados: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y U. A. E.
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)

IRMA CECILIA CARDONA MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 25.161.458 expedida en el municipio de Santa Rosa de Cabal, actuando en nombre propio, con la calidad actual de funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Seccional de Aduanas de Pereira; en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, por medio del presente escrito formulo ACCIÓN DE TUTELA contra las entidades COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN-, para que judicialmente se conceda la protección inmediata de mi derecho constitucional fundamental del DERECHO AL TRABAJO y al acceso al mismo en condiciones justas, iguales y equitativas; AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO EN CONCURSO DE MERITOS, AL DERECHO DE DEFENSA y A LA IGUALDAD. Los cuales se encuentran gravemente vulnerados y/o amenazados, por parte de la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y la U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN-, con base en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: En la actualidad soy funcionaria de carrera de la entidad DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN- en la ciudad de Pereira. Aprovechando la oportunidad, que brinda la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES y la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, me presente e inscribí debidamente al Concurso de Ascenso No. 2238 de 2021, al cargo de INSPECTOR IV

SEGUNDO: Examinada la publicación de resultados de la verificación de requisitos mínimos publicada en la plataforma SIMO el día 28 de julio de 2022, pude verificar que obtuve como resultado NO ADMITIDO, con fundamento en lo siguiente:

“El aspirante NO CUMPLE con los REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN establecidos en el artículo 7 del Acuerdo rector del presente Proceso de Selección y en el Decreto Ley 71 de 2020.”

TERCERO: De igual forma, observo en la consulta del detalle de los resultados publicados, que no fueron verificados los documentos aportados para demostrar el cumplimiento de los requisitos mínimos para el cargo en el cual me encuentro inscrita, por no acreditar el certificado de las correspondientes competencias laborales expedido por la Escuela de Impuestos y Aduanas, manifestado así:

“No se procede a la verificación de los documentos de estudio y experiencia aportados por el aspirante, toda vez que NO acredita el certificado de las correspondientes competencias laborales expedido por la Escuela de Impuestos y Aduanas o la Universidad o Institución de Educación Superior acreditada por el Ministerio de Educación Nacional, incumpliendo así los REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN establecidos en el numeral 27.3 del Artículo 27 del Decreto Ley 71 de 2020.”

No se procede a la verificación de los documentos aportados por el aspirante, toda vez que , NO acredita el certificado de las correspondientes competencias laborales expedido por la Escuela de Impuestos y Aduanas o la Universidad o Institución de Educación Superior acreditada por el Ministerio de Educación Nacional ,incumpliendo así los REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN establecidos en el numeral 27.3 del Artículo 27 del Decreto Ley 71 de 2020.”

CUARTO: Actualmente cumplo con los requisitos exigidos de Estudio y Experiencia Profesional y experiencia relacionada para el cargo de **INSPECTOR IV**

QUINTO: Conforme al abecé proceso de selección concurso de la DIA, se orientó que la certificación de competencias laborales no debía ser adjuntada al SIMO de nuestra parte sino que internamente la entidad los haría llegar a la CNSC para que se reconocieran como requisito habilitante, como se observa en la siguiente imagen del ABC Competencias Laborales, remitido vía correo electrónico y publicado en los medios institucionales.

7. ¿Cómo se realizará la acreditación de competencias para participar en el concurso de ascenso?

- Se evaluarán las competencias conductuales básicas a través de una prueba a los servidores de carrera administrativa.
- La aplicación se efectuará en modalidad virtual.
- La Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas remitirá certificación habilitante a la CNSC de los servidores que demuestren el nivel 1 de las competencias, dando cumplimiento al art. 27.3 del Decreto Ley 071 de 2020.
- La vigencia de la certificación será de 3 años.



10.

¿Cuándo me inscriba en el concurso debo adjuntar al SIMO la certificación que expide la Escuela para acreditar las competencias laborales?



NO. La Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas remitirá la certificación directamente a la CNSC, por lo cual no es necesario que el aspirante al concurso adjunte dicha certificación.

SEXTO: En reiteradas ocasiones las áreas competentes de Subdirección de Gestión de Empleo Público, Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas y Subdirección de Desarrollo del Talento Humano, manifestaron a través de correos electrónicos, webinar o charlas de información del concurso de ascenso, como publicaciones en los medios de información de la entidad, que la certificación de competencias laborales, no constituía un requisito mínimo sino un requisito habilitante para participar en el concurso de ascenso y que como tal para el cumplimiento de estos requisitos habilitantes, como lo es la constancia del registro en carrera administrativa, la constancia de la evaluación de desempeño y la certificación de competencias laborales, serían remitidos directamente por la DIAN a la Comisión Nacional del Servicio Civil y más específicamente la certificación de competencias laborales sería remitida directamente por la Subdirección de la Escuela de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

SEPTIMO: El día 28 de Julio de 2022 presenté la correspondiente Reclamación a través del aplicativo SIMO ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, con fundamento en los hechos narrados anteriormente considerando que cumplo con los requisitos habilitantes para la participación en el Concurso de Ascenso DIAN convocatoria 2238 de 2021. Adjuntado así el certificado de competencias laborales mencionado.

OCTAVO: El día 10 de Agosto de 2022, la Comisión Nacional del Servicio Civil a través de la plataforma SIMO, publicó la respuesta a la reclamación presentada, mediante la cual me informan que deciden mantener la determinación inicial y no modificar la condición de NO ADMITIDO, por considerar que es responsabilidad del aspirante cargar la documentación que pretenda aportar para este proceso de selección, aun cuando la DIAN en reiteradas ocasiones, nos había manifestado que sería la encargada de suministrar esta información a la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, así:

“ ...De igual manera, es pertinente aclarar que, de conformidad con el Anexo del Acuerdo del Proceso de Selección modificado parcialmente por el Acuerdo N° 218 de 2022, **es responsabilidad exclusiva del aspirante cargar la documentación que pretenda aportar para este proceso de selección en el Sistema-SIMO**, por tanto, no es correcto afirmar que dicha obligación debe ser asumida por la entidad convocante.

“III. DECISIÓN.

Realizada la verificación se permite decidir lo siguiente:

*1. De acuerdo con la evaluación técnica hecha en el numeral II del presente documento, se determina que usted **NO CUMPLE** con los requisitos generales para participar en este proceso de selección.*

*2. De conformidad con el numeral anterior, se mantiene la determinación inicial y no se modifica su estado dentro del Proceso de Selección DIAN Ascenso No. 2238 de 2021 manteniendo el mismo como **NO ADMITIDO**.*

3. Comunicar esta decisión a través de la página web oficial de la CNSC, en el enlace SIMO, cumpliendo de esta manera con el procedimiento del proceso de selección y el mecanismo de publicidad que fija la Ley 909 de 2004 en su artículo 33.

4. Contra la presente decisión, no procede ningún recurso según lo establecido en el artículo 12 del Decreto Ley 760 de 2005 y el numeral 2.5. del Anexo modificado parcialmente.”

NOVENO: A todas luces el desconocimiento por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, de dicha certificación de las correspondientes competencias laborales emanado de la escuela de impuestos y aduanas, no consulta la verdad y realidad del proceso de inscripción y menos de selección, no valora ni sopesa la validez y contenido de los documentos aportados desde el inicio y de manera oportuna; y ello aunado a ese cambio abrupto de la información en el sistema, lo único que denota es arbitrariedad e irregularidad en el manejo, estudio y valoración de la documentación e información allegada y relacionada en el SIMO como se dijo, desde el principio, aplicativo que administra la citada Entidad (CNSC).

En consecuencia y con su conducta omisiva, la CNSC falta gravemente a su función pública, violentándose con ello el DERECHO AL TRABAJO y el acceso al mismo en condiciones justas, iguales y equitativas (Artículo 25 de la C.Nal); al principio de la Buena Fe (Art. 83 C.Nal), la Confianza Legítima en las instituciones, al Derecho de Defensa (art. 29 C.Nal.), el Principio de Contradicción y el Principio de Igualdad. Y más aún, cuando esto me priva de presentar el reclamo contra la inadmisión, por la inesperado y sorpresivo posterior cambio en la de decisión de no continuar en el concurso.

DERECHOS VULNERADOS

El aspecto central de la INADMISION por parte de la CNSC corresponde al desconocimiento del DERECHO AL TRABAJO y al acceso al mismo en condiciones justas, iguales y equitativas; AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO EN CONCURSO DE MERITOS, AL DERECHO DE DEFENSA y A LA IGUALDAD. Así las cosas, el derecho a ejercer cargos públicos y el derecho al trabajo materializado en una potencial aprobación del concurso, es una violación originada en el desconocimiento del debido proceso, de tal forma que me dispondré a realizar la exposición insistiendo que el señor juez conoce los detalles formales, legales y prácticos de la vulneración del derecho a mi legítima aspiración al ejercicio de un cargo público y por ende al trabajo a través de un concurso de ascenso.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Fundamento esta acción en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 y sus decretos reglamentarios 2591 y 306 de 1992.

Artículos 13, 40 y 49 de la Constitución Política Nacional

Ley 1751 de 2015.

Procedibilidad de la Acción de Tutela. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece. "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (...)

Concretamente, la procedencia de esta Acción de Tutela se justifica en la medida de no existir otro medio de defensa judicial ante la vulneración del Derecho Constitucional Fundamental al Trabajo y el acceso al mismo en condiciones justas, iguales y equitativas

Al respecto, la Sentencia T-149/13 de la Honorable Corte Constitucional dijo:

*“De acuerdo con el Artículo 86 de la Constitución Política, **toda persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, y procederá contra toda acción u omisión de la autoridades públicas, o particulares según se trate, siempre que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.** En la misma línea, el Artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 confirma la naturaleza residual de la acción de tutela y sus condiciones de procedencia cuando existe un mecanismo ordinario de defensa, e indica que la eficacia de dichos recursos debe ser apreciada en concreto, “atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.* (Resaltado para enfatizar).

Derecho Constitucional Fundamental al Trabajo, al respecto el artículo 25 de la C.Nal, consagra lo siguiente:

*“**Artículo 25.** El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.*

A su vez el artículo 122 de la C.Nal., consagra en su ordenamiento:

*“**Artículo 122.**..No habrá empleo público **que** no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere **que** estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.*

La Corte Constitucional en sentencia T-611/01, señala que el DERECHO AL TRABAJO- tiene doble dimensión *“El derecho al trabajo tiene una doble dimensión: individual y colectiva, reconocida en la Constitución. El aspecto individual se refiere a la facultad que tiene toda persona de elegir y ejercer profesión u oficio en condiciones dignas y justas. En la dimensión colectiva implica un mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo una política de pleno empleo porque de lo contrario el ejercicio del derecho al trabajo se convierte en una simple expectativa”.*

Así las cosas, el trabajo está en el centro de las aspiraciones de las personas pues constituye el medio para obtener su sustento, el mejoramiento de la calidad de sus vidas y su realización personal, siendo esencial para el bienestar de la gente.

Por lo que nuestra Carta Magna, consagra y protege sin lugar a dudas el Derecho Constitucional Fundamental al **DERECHO AL TRABAJO** e igualmente **al acceso al mismo en condiciones justas, iguales y equitativas.**

La sentencia Sentencia T- 059 de 2019

*“En igual sentido, en la **sentencia SU-913 de 2009** la Sala Plena de la Corte consideró que **“en materia de concursos de méritos para la provisión de cargos de***

carrera se ha comprobado que **no se encuentra solución efectiva ni oportuna acudiendo a un proceso ordinario o contencioso** –administrativo-, en la medida que su trámite llevaría a extender en el tiempo de manera injustificada la vulneración de derechos fundamentales que requieren de protección inmediata. Esta Corte ha expresado, que **para excluir a la tutela en estos casos, el medio judicial debe ser eficaz y conducente**, pues se trata nada menos que de la defensa y realización de derechos fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar el mecanismo de tutela para sustituirlo por un instrumento previsto en el ordenamiento legal que no garantice la supremacía de la Constitución en el caso particular ”

Aunque la sentencia de unificación fue antes del nuevo código administrativo, de la misma manera siguió describiendo la actualización jurisprudencial indicando:

*Ahora bien, recientemente, mediante la **sentencia SU-691 de 2017**, la Sala Plena tuvo la posibilidad de pronunciarse nuevamente respecto de la eficacia de los medios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de las medidas cautelares que pueden ser decretadas por el juez. En esa providencia, esta Corte consideró que estas nuevas herramientas permiten garantizar la protección de los derechos de forma igual o, incluso superior a la acción de tutela en los juicios administrativos, **pero ello no significa la improcedencia automática y absoluta de la acción de tutela como mecanismo de protección subsidiario de los derechos fundamentales**, ya que los jueces constitucionales tienen la obligación de realizar, de conformidad con el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, un juicio de idoneidad en abstracto y otro de eficacia en concreto de los medios de defensa alternos y, en ese sentido, están obligados a considerar: “(i) el contenido de la pretensión y (ii) las condiciones de los sujetos involucrados”. (subrayas y negrillas mías)*

Dada la cercanía a la fecha de las pruebas escritas (28 de agosto) de la cual fui excluida, no cuento con un mecanismo jurídico eficaz para la protección de mis derechos fundamentales en sede de la propia actuación concursal, si se tiene en cuenta que ya no procede ningún otro recurso, por ello la acción de tutela es mi única y expedita opción para evitar el perjuicio irremediable.

La acción de tutela se enfoca a evitar el perjuicio irremediable en los términos que lo ha definido la Corte Constitucional, que en Sentencia T-180 de 2019 reitera los criterios a saber:

En relación con la figura del perjuicio irremediable, esta Corte ha señalado que, para que se torne en procedente la acción de tutela, se deben reunir los siguientes requisitos: (i) que se trate de un hecho cierto e inminente; (ii) que las medidas a tomar deben ser urgentes; (iii) que la situación a la que se enfrenta la persona es grave; y finalmente (iv) que las actuaciones de protección han de ser impostergables”

Los elementos para la configuración del perjuicio irremediable se encuentran presentes en mi caso, dado que **i)** es un hecho cierto que fui inadmitida al concurso,

excluida sin otro recurso jurídico posible, **ii)** el próximo 28 de agosto será el examen escrito y por lo tanto es urgente la resolución de mi amparo constitucional, **iii)** la exclusión y no presentación del examen me afecta gravemente por cuanto me impide seguir participando en el concurso de ascenso y finalmente **iv)** resulta impostergable la decisión de protección constitucional en cuanto después de aplicada la prueba escrita no habrá posibilidad de responderla, salvo que el señor Juez constitucional disponga otra cosa.

Por ello se solicitará en el acápite pertinente la adopción de una medida provisional para garantizar la presentación de la prueba escrita, mientras se define la situación de fondo por la violación al debido proceso, entre otros.

Estoy siendo perjudicada en mis intereses de ascender en la carrera administrativa de la UAE DIAN con la ratificación de la inadmisión por parte de la CNSC del Concurso de méritos de la Convocatoria 2238 de 2021 debido a la incorrecta e inadecuada valoración de los soportes documentales que acreditan eficiente y eficazmente mi cumplimiento frente a los requisitos establecidos para optar al cargo **INSPECTOR IV**

Cumplo ampliamente con los requisitos señalados para el cargo al que opté por cuanto la entidad divulgó previamente a la inscripción por los canales institucionales un abecé sobre estos trámites donde señaló que a través de la Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas remitiría las certificaciones directamente a la CNSC y que por lo tanto no era necesario que cada aspirante la subiera a la plataforma SIMO. Es posible que posteriormente hayan cambiado las condiciones en cuanto a que ya no se realizaría esta operación sino que se hiciera de manera personal la inclusión en el SIMO, sin embargo esto es violatorio del debido proceso y la legítima confianza, entre otros derechos, pues si se me indica a través de una directriz interna que así se procederá, el aspirante cree firmemente en lo anunciado y se confía en lo dicho inicialmente, razones hay suficientes para justificarlo, entre otras, la excesiva carga laboral que nos aqueja en la entidad, la turbación que produjo la pandemia y sus consecuencias de adaptabilidad con el trabajo en casa y la alternatividad, todo ello conjugado con la multiplicidad de situaciones de carácter familiar, consumen al trabajador en el día a día, esto conduce a que no se haya avizorado un cambio y dejado confiadamente a que la entidad realizara la operación primigenia ofrecida que era la de que por su cuenta la entidad haría lo propio para que la CNSC incluyera las certificaciones de competencias laborales, además porque es de la esencia de la UAE DIAN la asunción de esta acción.

Esta situación deja ver nuevamente la improvisación y la falta de coordinación entre las entidades involucradas en el proceso concursal, que resulta perjudicando y desgastando a los aspirantes pues nos obligan en un tiempo perentorio a tener que rebuscar a las carreras documentos que reposan en la entidad (ley antitrámites), y a tener que construir un documento para reclamar sobre un aspecto que supuestamente la DIAN resolvería satisfactoriamente.

Sobre este último particular, la ley antitrámites prohíbe que se exijan documentos que reposan en las bases de datos de las entidades, no obstante, se trate de un concurso de méritos la ley no dispuso una excepción para este trámite, por eso la UAE DIAN ofreció incorporarla por su cuenta a la CNSC porque está en su poder, además se trata de un requisito habilitante que a cada aspirante se le ha generado, cambiar la disposición a que ya debían ser incorporados por nuestra cuenta, nos hizo incurrir en error, pues tuve la convicción de que la DIAN cumpliría con lo ofrecido.

Es así como por medio de las comunicaciones remitidas por las Subdirecciones de **Gestión de Empleo Público, Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas y Subdirección de Desarrollo del Talento Humano**, se indujo al error, al informar en reiteradas ocasiones que la certificación de competencias laborales sería remitida directamente por la Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas a la CNSC, y por lo tanto no era necesario ser cargada por cada aspirante al sistema SIMO.

Ahora bien de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del Acuerdo No. 2212 de 2021,

“Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección de Ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, Proceso de Selección DIAN No. 2238 de 2021”, al momento de registrar la correspondiente OPEC en el SIMO, por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, fue certificada por la entidad la cantidad de servidores públicos que cumplían con los requisitos habilitantes del Art. 27 del Decreto Ley 71 de 2020 y por ende podíamos realizar la inscripción para el concurso de ascenso, es decir el cumplimiento de los requisitos del Art. 27 del Decreto Ley 71 de 2020, ya había sido certificado por la DIAN, para realizar el concurso interno de ascenso y es por esto que corresponde a la entidad DIAN la certificación de los requisitos habilitantes y no como se está entendiendo por parte de la CNSC, que está trasladando esta obligación al servidor público inscrito a este concurso, por tal razón siempre las Subdirecciones de Gestión de Empleo Público, Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas y Subdirección de Desarrollo del Talento Humano, manifestaban en sus comunicaciones que sería la DIAN directamente quien remitiría esta información a la CNSC.

Acuerdo No. 2212 de 2021:

“En cumplimiento de esta labor, la entidad referida registró en el SIMO la correspondiente OPEC para este proceso de selección, la cual fue certificada por su Representante Legal y la Jefe de la Unidad de Personal, o su equivalente, al registrarla en este aplicativo y aceptar sus Condiciones de Uso, directamente o mediante otros usuarios creados, habilitados o autorizados por ellos o por sus antecesores, certificando igualmente *“(…) que la información contenida en el*

presente reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa – OPEC, corresponde a los empleos de carrera en vacancia definitiva existentes a la fecha en la entidad y que la información reportada corresponde a la consignada en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente, o su equivalente”, el cual fue remitido a la CNSC mediante el radicado No. 2021RE023550 del 30 de diciembre de 2021. Adicionalmente, los referidos funcionarios, al certificar la aludida, asumieron que “Las consecuencias derivadas de la inexactitud, equivocación o falsedad de la información serán de exclusiva responsabilidad de la entidad (...), por lo que se exime a la Comisión Nacional del Servicio Civil de algún tipo de responsabilidad frente a terceros, por la información reportada (...).”

“Además, para este proceso de selección en la modalidad de Ascenso, dichos servidores públicos, mediante radicado No. 2021RE020764 del 22 de diciembre de 2021, certificaron la cantidad mínima de servidores públicos de carrera administrativa de la entidad que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 27 del Decreto Ley 71 de 2020 para participar en los concursos o procesos de selección de Ascenso, de conformidad con las disposiciones del artículo 26 ibídem, en los términos señalados en la Parte II del Anexo Técnico de la Circular Externa de la CNSC No. 0011 de 2021.”

De igual forma, aunque para efectos de la verificación de los requisitos de participación, como lo expone la Comisión Nacional del Servicio Civil, en su respuesta a la reclamación presentada, de conformidad con lo dispuesto en numeral 5 del artículo 7 del Acuerdo rector y en el artículo 27 numeral 27.3 del Decreto Ley 71 de 2020, *“Por el cual se establece y regula el Sistema Específico de Carrera de los empleados públicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y se expiden normas relacionadas con la administración y gestión del talento humano de la DIAN”,* los aspirantes deben cumplir, entre otros, el siguiente requisito general para participar en este proceso de selección:

ARTÍCULO 7. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN Y CAUSALES DE EXCLUSIÓN. Los siguientes son los requisitos generales que los aspirantes deben cumplir para participar en este proceso de selección y las causales de exclusión del mismo.

(...) 5. Acreditar las correspondientes competencias laborales mediante la certificación que expida la Escuela de Impuestos y Aduanas o la correspondiente Universidad o Institución de Educación Superior acreditada por el Ministerio de Educación Nacional (numeral 27.3 del artículo 27 del Decreto Ley 71 de 2020).

En ningún momento, ni en el contenido del Acuerdo No. 2212 de 2021, *“Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección de Ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, Proceso de Selección DIAN*

No. 2238 de 2021”, ni en su anexo, ni a través de ninguna circular proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, se reglamentó o estableció la forma como debía acreditarse las correspondientes competencias laborales y fue solo a través de las erradas comunicaciones de la DIAN, que se informó la presunta forma como serían certificadas y aportadas por la misma entidad a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL

En aplicación del artículo 7o del Decreto 2591 de 1991 que señala:

*“Artículo 7o. **Medidas provisionales para proteger un derecho.** Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.*

Sin embargo, a petición de parte o de oficio se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante.

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como con secuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso.”

Como ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, en diferentes ocasiones, entre otras como se define en la Sentencia T-103/18:

MEDIDAS PROVISIONALES-Finalidad

La protección provisional está dirigida a: i) proteger los derechos de los demandantes con el fin de impedir que un eventual amparo se torne ilusorio; ii) salvaguardar los derechos fundamentales que se encuentran en discusión o en amenaza de vulneración; y iii) evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos objeto de análisis en el proceso, perjuicios que no se circunscriben a los que pueda sufrir el demandante. De ahí que, el juez está facultado para “ordenar lo que considere procedente” con arreglo a estos fines (inciso 2o del artículo transcrito).

Considero se dan los presupuestos para que su señoría profiera medida provisional en la que proceda decretar la suspensión de las etapas siguientes, establecidas en desarrollo del Proceso de Selección DIAN dentro de la Convocatoria 2238 de 2021, para el cargo de **INSPECTOR IV**, específicamente la presentación de las Pruebas Escritas programadas para el próximo 28 de Agosto de 2022, porque producto de los actos concretos irregulares que condujeron a la CNSC y su contratista a declarar mi situación respecto de la Convocatoria 2238 de 2021 como **INADMITIDA** y la consecuente **EXCLUSIÓN** de la aplicación de pruebas, me han vulnerado en forma inminente mis derechos como el debido proceso, el acceso a cargos públicos, entre otros, lo cual permite en su sano raciocinio, enervar los efectos en forma temporal de mi INADMISIÓN.

Así las cosas, ruego a su señoría adoptar la medida provisional con el sentido de urgencia y/o se ordene a la CNSC adopte la decisión de admitirme o de continuar participando en el concurso, teniendo en cuenta que **la citación a examen escrito es para el próximo 28 de agosto de 2022**, medida a la que recurro ante la inminente consumación del perjuicio a mis derechos fundamentales como quiera que se me cercena el tan anhelado y esperado momento de continuar compitiendo en igualdad de condiciones con los demás aspirantes a un ascenso en la escala laboral de la UAE DIAN, oportunidad inédita en esta entidad.

En el evento en que no se acceda a dicha medida y que la definición de la presente acción sobrepase la fecha de la mencionada prueba, la decisión sea la de admitirme en el concurso y citarme a pruebas en la fecha que su señoría o la CNSC y dispongan.

Con base en los anteriores fundamentos de derecho y argumentos, se formulan las siguientes,

PETICIONES

PRIMERO: CONCEDER a mi favor el amparo de Tutela por el Derecho Constitucional Fundamental AL TRABAJO, y al acceso al mismo en condiciones justas, iguales y equitativas; AL DEBIDO PROCESO y al DERECHO DEFENSA.

SEGUNDO: ORDENAR a la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC- y que se coadyuve por la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, con la inclusión de la suscrita entre los aspirantes que cumplen los requisitos para acceder al Concurso de Ascenso No. 2238 de 2021, al cargo de INSPECTOR IV. Y por ende **“CONTINUA EN EL CONCURSO”**.

TERCERO: Ordenar a la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-, que se me programe y se me notifique fecha, hora y lugar donde debo presentar las pruebas del Concurso de Ascenso No. 2238 de 2021.

CUARTO: En caso de no cumplirse lo ordenado por usted Señor(a) Juez Constitucional, se continué con lo previsto en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991.

JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que por los mismos hechos y derechos no he presentado petición similar ante alguna autoridad judicial.

PRUEBAS

En orden a establecer la violación del Derecho Constitucional Fundamental cuya protección se invoca, solicito se sirva practicar y tener como pruebas las siguientes: Documentales que obran desde el inicio en la convocatoria en el sistema SIMO (se aportan pantallazos como constancia de su existencia):

Documentales

1. Constancia de inscripción
2. Reclamación interpuesta por la suscrita.
3. Respuesta a la reclamación suscrita por el contratista de la CNSC
4. Las demás que su despacho considere pertinentes practicar.

ANEXOS

Las mencionadas como pruebas documentales y copia de mi cédula de ciudadanía

COMPETENCIA

Es usted, Señor(a) Juez Constitucional, competente para conocer de esta Acción de Tutela por tener jurisdicción en donde ocurrió la violación al derecho fundamental y por ser accionado una entidad con las características antes descritas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 1 del Decreto 1983 de 2017.

NOTIFICACIONES

1. COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, CARRERA 16 No. 96 -64, Piso 7, Bogotá D.C., correo electrónico para notificaciones judiciales

notificacionesjudiciales@cncs.gov.co y atencionalciudadano@cncs.gov.co, los cuales se extraen de la página web de la entidad.

2. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, notificaciones electrónicas notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co y/o Página web www.dian.gov.co /Portal Web /Servicios a la Ciudadanía /Notificaciones Judiciales y/o <https://www.dian.gov.co/atencionalciudadano/contactenos/paginas/buzoneselectronicos.aspx>

3. La suscrito recibe notificaciones y requerimientos en correo electrónico ircecama@hotmail.com

Atentamente,

IRMA CECILIA CARDONA MARTINEZ
C.C. 25.161.458 expedida en Santa Rosa de Cabal

